



JOSE RIANTE

De las etapas que deben cumplir los proyectos de inversión en Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) representa una de las más complejas, según expertos. Y la necesidad de las empresas y servicios públicos de cumplir con una normativa cada vez más estricta en materia de protección patrimonial ha generado que en los últimos años se evidencie un crecimiento de las firmas de arqueología y consultores independientes en la materia.

El organismo encargado de velar por el resguardo del patrimonio cultural es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), cuyo consejo preside la subsecretaría del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez. Allí cada proyecto es evaluado por los arqueólogos de la Secretaría Técnica del CMN. Luego pasa a la Comisión de Arqueología que componen expertos y consejeros, los que evalúan las solicitudes de permisos de excavación y prospección arqueológica. Luego se desarrolla una sesión plenaria —cada 15 días— en la que se adoptan acuerdos para el avance de cada proyecto.

Y la legislación actual convierte a los arqueólogos en una pieza clave. Desde el CMN, comentan que se recomienda a los titulares de los proyectos, hacer estudios previos del lugar donde se instalarán las obras. El primer paso es realizar una caracterización arqueológica, en la que los desarrolladores proponen medidas de rescate, mitigación o manejo de los hallazgos. Luego de eso, los permisos de excavación y prospección solo pueden ser solicitados al CMN por arqueólogos. De hecho, cuando organismos como el propio Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolla algún proyecto, debe contratar a arqueólogos para solicitar las autorizaciones.

“Estamos ante lo que llamamos el ‘mercado de la permisología’, una industria de consultores que han surgido al alero de las nuevas y crecientes exigencias que hacen los entes reguladores en materia de inversión”, afirma el arquitecto y director de la oficina de urbanismo Atisba, Iván Poduje.

Y los arqueólogos serían un ejemplo claro de las especialidades en auge, dice, “es una disciplina que se ha disparado en cuanto a los requerimientos y con honorarios muy caros, porque son personas que cobran generalmente por mes”. Estima que sus honorarios parten en las 200 UF, unos \$7,8 millones.

Louis de Grange, decano de Ingeniería UDP y expresidente de Metro de Santiago, vivió personalmente el retraso en las obras de la expansión del metro tras hallazgos arqueológicos que paralizaron la construcción. De hecho, cuenta que tuvieron que ir a Perú a buscar arqueólogos porque los valores acá eran tres o cuatro veces más altos.

La presidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile, Verónica Baeza, refrenda: “Hay un aumento de profesionales disponibles para consultoría arqueológica, eso es evidente”. Esta “explosión” —agrega— viene hace unos diez años; “quizá ahora es más notorio por temas que tienen que ver con lo que se ha denominado ‘permisología’”.

“Se puede ver en la cantidad de universidades que están dando la carrera. Para los profesionales que se están titulando año a año, el mercado laboral al que salen es el de la consultoría, porque es el que tiene más demanda de profesionales”, subraya Baeza.

Nuevos arqueólogos en el sector público

Todo esto partió con la Ley de Bases del Medio Ambiente durante la década de los

El rescate arqueológico bordea los \$700.000 por metro cuadrado en sector público

“SE BUSCAN ARQUEÓLOGOS”, la profesión que vive un auge a raíz de la “permisología”

Las empresas los están buscando incluso en el exterior. Es que los permisos de prospección que deben solicitar al Consejo de Monumentos para impulsar un proyecto solo pueden ser gestionados por arqueólogos. Se estima que la Línea 7 del metro ya tendría sobrecostos por US\$ 70 millones, derivados de la contratación de los profesionales y del retraso por hallazgos.

• GUILLERMO V. ACEVEDO



Iván Poduje, arquitecto.



Verónica Baeza, presidenta Colegio de Arqueólogos.



Louis de Grange, exdirector de Metro.

90. La normativa “permitió el ingreso de toda una industria que hacía los estudios de impacto ambiental que antes no existía”, dice Poduje, e iría “más allá del cuidado ambiental, es un negocio de consultoría que va en aumento”.

El único requisito para solicitar permisos es ser arqueólogo titulado, dicen en la industria, de modo que para crear una consultora o una oficina de asesorías no se requieren otras autorizaciones.

En Chile la empresa privada es la que más demanda arqueólogos, pero también hay mandantes como el MOP que los necesitan para proyectos de infraestructura, o vivienda.

“Últimamente el Estado ha empezado a demandar más arqueólogos porque hay otras reparticiones públicas más allá de la Secretaría Técnica del CMN que decidieron integrar la visión de estos expertos en etapas más tempranas, como el MOP o el Minvu, que ya cuentan con su equipo de arqueólogos”, afirma Baeza.

Una de las empresas que contrata más arqueólogos, por la naturaleza de sus operaciones, es Metro de Santiago. La empresa pública cuenta con cinco arqueólogos de planta, pero además contrata consultores externos según cada proyecto. De Grange sostiene que para las líneas 3 y 6 del metro los sobrecostos asociados a la contratación de arqueólogos o retrasos de las obras por

hallazgos alcanzaron los US\$ 52 millones. Y en la nueva Línea 7 sería incluso más grave, con sobrecostos que ya habrían superado los US\$ 70 millones, dice el académico.

“Durante las obras se debe contar en todo momento con un arqueólogo”, comenta, e identifica un “conflicto de interés gigante”, puesto que un especialista podría decidir arbitrariamente retrasar obras porque eso le generaría un beneficio económico.

“No es solo un costo financiero para el Estado —agrega—, sino que hay un costo social asociado a que las obras para el transporte se extiendan 18 meses por estas razones”, sostiene de Grange.

Este auge ha incentivado que incluso arqueólogos de otras nacionalidades vengan a trabajar a Chile.

“He notado españoles principalmente”, dice Verónica Baeza, que han entrado en los staff permanentes de las consultoras.

El único requisito para que un arqueólogo extranjero pueda ejercer su profesión en Chile es contar con el

patrocinio de una universidad chilena. No obstante, desde el CMN sostienen que son pocos los arqueólogos extranjeros que solicitan permisos, y generalmente son para investigación.

Si bien los valores varían significativamente dependiendo del sector, tareas o la complejidad del proyecto, si se toman como referencia los valores publicados por el Minvu, para la labor de Rescate Arqueológico se pagan unos \$700.000 por metro cuadrado.

Para una Inspección Visual Arqueológica, el valor referencial de la actividad es de \$2.500.000, y para el Monitoreo Arqueológico Permanente, el valor del mes de monitoreo es de \$3.500.000.

“Excesos” en la orgánica

Hoy, los contactados apuntan a que el procedimiento para obtener el visto bueno desde el CMN se ha dificultado. “Dentro de la orgánica se han generado complejidades, como la existencia de ciertos excesos de lo que se necesita para este cuidado patrimonial”, dice Verónica Baeza. “Como Colegio de Arqueólogos hemos hecho muchos análisis de cómo se ha gestionado el patrimonio arqueológico dentro de las regulaciones ambientales, y hemos sido críticos, por ejemplo, de cómo se ha llevado por los organismos técnicos, específicamente desde la Subsecretaría del Patrimonio. Hay muchas cosas que tienen que mejorar en la gestión y tiene que ver con lo que se solicita en el contexto de proyectos de inversión”, agrega la arqueóloga.

Poduje apunta a que el problema es que “se está creando una industria que se alimenta de la paralización de la inversión. (...) Han aumentado las exigencias y hay estudios que requieren expertos en especialidades muy complejas, muy poco recurrentes, y lo que hace es generar un mercado más caro todavía. Para hacer un estudio para remediar un suelo contaminado una empresa te puede cobrar US\$ 600.000 o US\$ 1 millón”.

Es el caso de hospitales como en La Unión, Melipilla, Rengo o de Puerto Varas que han sufrido retrasos por hallazgos arqueológicos. Tiene que ver con las prioridades, sostiene Poduje: “Tenemos el caso de la seremi de Medio Ambiente de la RM que pide realizar un estudio de fauna invertebrada y ese estudio implica paralizar un hospital del cáncer”.

El Colegio de Arqueólogos ha entregado vías de solución precisamente para no entorpecer proyectos de interés social. “No se nos ha escuchado”, señala Baeza.

Agrega que han expresado abiertamente a la autoridad “la necesidad de priorizar la gestión de proyectos, aunque sin desregular lo patrimonial. Y volvemos a chocar con la misma piedra una y otra vez, habiendo experiencias previas que si se analizaran mejor, nos evitaría repetir dificultades”, agrega.

Han planteado discusiones sobre qué es un sitio arqueológico. O si cada objeto o fragmento es arqueológico. “A veces las cosas se van enredando por criterios metodológicos, por intentar aplicar fórmulas a todo evento, y la verdad es que no funciona así. Se requiere un análisis caso a caso”, dice.

